

Norte del Cauca¹

Informe preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz

FEBRERO DE 2019



Resumen

En el norte del Cauca las comunidades y la institucionalidad pública le han apostado a la implementación del Acuerdo de Paz; sin embargo, en la actualidad se encuentran en un momento de incertidumbre ligado al cambio de gobierno y al nuevo ciclo de enfrentamientos armados entre grupos ilegales. La opinión general es que el PNIS agotó sus capacidades y el PDET empieza a entrar en una fase en que depende de recursos externos y no propios. Esto ha abierto dudas sobre la continuidad de estas iniciativas. Aunque aún hay disposición para seguir trabajando en el desarrollo del Acuerdo de Paz, los distintos actores, pero en especial las comunidades, reclaman acciones concretas, para que lo avanzado no se quede en una lista de promesas.



1. Estado de la implementación

a) La renovación territorial (PDET)

En el PDET de *Alto Patía* y *Norte del Cauca* se agrupan los municipios del norte del Cauca, centro-sur del departamento, cinco municipios del norte de Nariño y dos del sur del Valle. El desarrollo de este PDET ha priorizado al norte del Cauca de manera que a finales de noviembre de 2018 ya había sido finalizada la fase veredal y municipal para esta región, y en diciembre se firmó el Plan de Acción para la Transformación Territorial (PATR).

Las organizaciones sociales y la institucionalidad han destacado el amplio proceso de participación que generó la metodología PDET, al igual que el reconocimiento a los distintos actores territoriales en paridad para el diálogo.

¹ Municipios de Buenos Aires, Caloto, Caldono, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Toribío, Suárez, Villa Rica.

No obstante, ya finalizada la fase municipal y con la presentación de las iniciativas que quedaron registradas, algunos representantes de sectores sociales como mujeres y campesinos han manifestado que sus aportes no quedaron incluidos, lo que ha generado inconformidad. Adicionalmente, los empresarios han indicado su disgusto pues la metodología no contemplaba su participación sino hasta después del cierre de la fase municipal por lo cual perciben que se accedió a ellos una vez consolidada una lista de prioridades del territorio, en búsqueda de financiación sin haber podido ser parte del diálogo. El gremio azucarero del Valle incluso ha señalado que su acercamiento ha sido por iniciativa propia y no desde el Programa.

b) La reincorporación

Tras el primer año del proceso de dejación de armas, buena parte de los excombatientes de los tres ETCR del norte del Cauca, ya no habitaban estos espacios. A marzo de 2018² permanecía menos de la mitad de los excombatientes que ingresaron: La Elvira - Buenos Aires 48% (140), Los Monos - Caldono 37% (150) y Monterredondo - Miranda 45% (100).

Buena parte de los excombatientes han retornado a sus lugares de origen y los actores locales perciben una calma relativa en estas regiones. Sin embargo, de acuerdo con el seguimiento realizado por la FIP desde el inicio de la implementación, en el norte del Cauca se han presentado 15 agresiones a excombatientes, de las cuales 12 fueron homicidios, 2 agresiones a familiares y 1 tentativa de homicidio. Estas han tenido lugar en los municipios de Corinto (3), Caloto (3), Toribío (2), Buenos Aires (2), Suárez (2), Miranda (2) y Santander de Quilichao (1).

Ante el horizonte de elecciones locales se espera que FARC participe en campaña, pero no se anticipa una votación significativa debido a la tendencia tradicional del voto caucano en elecciones locales y como consecuencia de las décadas de violencia a manos del grupo.

c) La sustitución de cultivos ilícitos

Existe la percepción general en el territorio de que el PNIS ha fracasado en su misión y que no va a mostrar logros más allá de lo realizado a la fecha. De los municipios del norte solo Miranda se encuentra vinculado al PNIS y para 2016, previo al inicio del programa, contaba solamente con 5.98 hectáreas de coca. Para la misma fecha el Cauca sumaba 12.595 hectáreas de coca y solo 4 municipios del norte registraban cultivos (Buenos Aires, Caloto, Corinto y Miranda) con un total de 73.35 hectáreas.

² Estas son las cifras más recientes publicadas por la ARN por medio de la plataforma *La Paz en el Terreno*



Ahora bien, aunque el Cauca representaba el cuarto departamento con mayor volumen de cultivos de coca al inicio de la implementación, la problemática del norte radica mucho más en la marihuana y a la fecha no se ha ofrecido una estrategia clara de sustitución para estos cultivos ni para la amapola. Aunque no existen cifras sobre marihuana, el principal enclave para su cultivo en el país se encuentra en los municipios caucanos de Caloto, Toribío y Corinto.

d) Garantías de Seguridad

Aunque los primeros meses de la implementación del Acuerdo de Paz fueron de mucha calma para la región, la aparición de grupos armados en el norte a mediados de 2017 rápidamente encendió las alarmas frente a la seguridad de las comunidades. Las dinámicas de control territorial y poblacional han retornado a muchos municipios, lo cual ha traído consigo un incremento en amenazas, extorsiones, homicidios y delincuencia.

De igual manera, los homicidios a líderes mantienen a las comunidades y especialmente a las organizaciones sociales preocupadas por su seguridad. El Cauca representa el departamento con mayor número de líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación, de los cuales 21 corresponden al norte del departamento entre 2017 y lo corrido de 2019. Solo en enero de 2019, ocurrieron dos homicidios en el municipio de Suárez.

2. La situación de las víctimas

De acuerdo al Registro Único de Víctimas, el Cauca cuenta con 293.023 víctimas de las cuales 81.562 (28%) corresponden al norte del departamento. Debido al incremento del conflicto que ha habido durante 2018, su impresión general es que no ha habido cambios en el territorio con la implementación del Acuerdo. Sus comunidades han vuelto a ser objeto de amenazas por lo tanto no hay mejoría en su percepción de seguridad.

Adicionalmente las víctimas perciben que la alta inversión del Estado en la puesta en marcha de la implementación, se ha dado a costa de los recursos para su restitución e indemnización, por lo cual sienten que la implementación incluso les ha afectado más que traerles beneficios.

3. Posiciones de los actores claves en el territorio

Tanto la institucionalidad pública en el Cauca como las organizaciones de la sociedad civil han puesto sus esfuerzos y sus apuestas en la implementación del Acuerdo de Paz,



lo cual se evidencia en su alta participación en los espacios de convocatoria de los distintos programas que de este se desprenden. La tranquilidad percibida en el territorio durante los primeros meses de la implementación motivó a estos actores, sin embargo, con el retorno de dinámicas de violencia y el surgimiento de grupos armados, los ánimos han bajado. Las organizaciones internacionales y las civiles indican que anteriormente conocían a los líderes de los grupos armados y podían tener un diálogo para entrar a territorio y realizar sus labores con las comunidades; no obstante, la situación actual es de zozobra y no saben cómo proceder en el territorio sin comprender si están o no seguros, tanto ellos como las comunidades.

De igual manera, a los actores en general les preocupan los recursos para seguir ejecutando la implementación del Acuerdo. Además, la Fuerza Pública reconoce que se prepararon para una región en posconflicto y no necesariamente para enfrentar las nuevas dinámicas de criminalidad y de confrontación que han emergido con la salida de las FARC del territorio.

4. Principales dinámicas de la confrontación armada

El norte del Cauca fue antes de la firma del Acuerdo de Paz, uno de los principales bastiones de las FARC. Desde mediados de 2017 se han formado en estos municipios algunas disidencias (principalmente del Frente 6°), que sumarían aproximadamente 40 miembros según testimonio de Fuerza Pública. De igual manera emergieron en la región grupos pequeños autodenominados como ELN y EPL. Estos también habrían sido conformados por excombatientes de las FARC que no se adhirieron al proceso de reincorporación. Aunque se han presentado algunos enfrentamientos entre estos grupos, la Fuerza Pública afirma que estos realizan pocas acciones en su contra para no hacerse muy visibles y ocuparse de las economías ilegales.

Los grupos armados de la región se ocupan principalmente del control de la producción y tráfico de coca y marihuana, espacio dejado por las FARC tras el inicio de su proceso de desarme. La disputa por los corredores estratégicos que se forjan desde el norte del Cauca y el sur del Valle (Jamundí) hacia el río Naya y su desembocadura en el Pacífico, han generado una ola de enfrentamientos en las primeras semanas de 2019 entre el EPL y las disidencias. Las comunidades de Corinto y Toribío han sido las principales afectadas.

Adicionalmente, la reciente resolución de los indígenas Nasa de no permitir más cultivos de uso ilícito en sus territorios, les ha convertido en objetivo de amenazas y agresiones por parte de los grupos armados de la región.

5. Preocupaciones sobre la implementación

- a) A los distintos actores territoriales les preocupa el futuro de la implementación, pues existe la percepción de que se agotan los recursos para los programas.
- b) Para el caso de PDET preocupa la idea de que no hay recursos propios, sino que la puesta en marcha de las iniciativas dependa en su totalidad de su vinculación al Plan de Desarrollo Departamental.
- c) Las comunidades ya no ven opción de vinculación al PNIS y por el contrario empieza a resonar ampliamente la idea de erradicación forzada. Los indígenas incluso han realizado propuestas al gobierno sobre cómo proceder con el programa para sus comunidades, pero dicen no haber tenido acogida.
- d) A las organizaciones sociales les preocupan los lineamientos que puedan surgir desde el nuevo gobierno respecto a la implementación, pues se percibe poca voluntad de llevar a cabo los compromisos acordados con las FARC.
- e) Según la *Cumbre Nacional de Mujeres y Paz*, en este departamento preocupa la falta de programas de liderazgo político y social para mujeres, las dificultades de la materialización del Programa Nacional de Garantías para Lideresas y Defensoras de DDHH del MinInterior, las dificultades para el acceso focalizado a tierras, la aparición de nuevas violencias contra las mujeres perpetradas por grupos armados ilegales, y la ausencia de enfoque de género en el PNIS.

6. La implementación en cifras





